

RIT N° : T-922-2022
RUC N° : 22-4-0406618-1
MATERIA : TUTELA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO
FUNDAMENTAL
CON OCASIÓN DEL DESPIDO, RECONOCIMIENTO DE RELACIÓN
LABORAL,
NULIDAD DE DESPIDO Y COBRO DE PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES.
DEMANDANTE : CLAUDIA ANGELA LANGE FARIAS
DEMANDADO : FISCO DE CHILE- MINISTERIO SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO

Santiago, a veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció CLAUDIA ANGELA LANGE FARIAS RUT N° 13.053.274-8, con domicilio en Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 10.064, comuna La Granja, quien interpuso demanda conforme al procedimiento de tutela laboral por despido discriminatorio, reconocimiento de la relación laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones e indemnizaciones, en contra de FISCO DE CHILE, Rut 61.806.000-4, representado, en mérito de lo que dispone el DFL N° 1/1993, del Ministerio de Hacienda, por el Consejo de Defensa del Estado, representado por su presidente, el abogado, don JUAN ANTONIO PERIBONIO PODUJE, Rut 7.834.852-6, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas 1225, piso 4, comuna de Santiago.

Al respecto indicó que comenzó a prestar servicios en la División de Organizaciones Sociales (en adelante la "DOS"), entidad dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, desde el 11 de abril de 2018. Desde esa fecha y hasta el término de mis funciones, el día 25 de marzo de 2022 (3



años, 11 meses y 14 días de extensión de la relación laboral) prestó servicios para dicha entidad, sin solución de continuidad en base a contratos nominados como de “*Honorarios a suma alzada*”, el último de ellos con una fecha de término fijada para el día 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, la relación laboral que la unía con dicho Ministerio estaba lejos de ser una de servicios a honorarios, siendo en la realidad, una que presentaba todas las características de aquellas reguladas por el Código del Trabajo, pues prestaba servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia. La División de Organizaciones Sociales (DOS), forma parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y su tarea consiste en generar puentes de comunicación entre el Gobierno y la sociedad civil, además de colaborar activamente en el fortalecimiento de ésta, busca, a través de distintas herramientas, informar o dar espacios de opinión para que toda la comunidad participe. Sus objetivos son contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución y comunicación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil, promover la participación de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas, coordinar, por los medios pertinentes, la labor del ministerio señalada en la letra i) del artículo 2° de la ley 19.032. Los ejes del trabajo que la DOS implementa están orientados a propiciar y potenciar espacios de participación. Cuatro ejes enmarcan el actuar y es mediante estos por los que la ciudadanía conoce y valida a esta institución: Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Participación e Información a la Ciudadanía, Asistencia Metodológica y Coordinación de las Normas de Participación Ciudadana y, finalmente, fomento de la Diversidad, la Inclusión Social y la No Discriminación. Dentro de dicha institución y de acuerdo al último contrato con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, sus labores consistían en “...*funciones de desarrollo y relatoría de contenidos de capacitación y escuelas desarrolladas por la D.O.S. y apoyo en la gestión territorial...*”. Al comenzar a prestar funciones en la DOS el 11 de abril de 2018 en el departamento de Consultas Ciudadanas y Diálogos Participativos lo hizo en relación a labores consistentes en apoyo en actividades de capacitaciones. Sin embargo, dicho contrato fue renovado desde el



01 de junio hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, cumpliendo funciones de apoyar y asesorar la ejecución del programa “*Diálogos Participativos*”, la cual consiste básicamente en ofrecer los productos de la DOS que eran las Escuelas de formación para dirigentes de todo tipo de módulos y el diálogo que consistía en las políticas públicas con respecto a bonos, registro social de hogares, etc, lo cual era realizado en terreno en distintas Municipalidades. Posteriormente, su contrato se renovó a contar del 02 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, realizando funciones de Asesoría Territorial, programática y logística para la realización de Capacitaciones y Diálogos de la D.O.S. Sus contratos fueron año tras año siendo renovados, sin solución de continuidad, tanto así que el 2020, nuevamente se le renovó el contrato con vigencia, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, para realizar las mismas funciones del año anterior. No obstante, dicho contrato fue modificado el 30 de abril de 2020, incorporando nuevas condiciones para la suscrita, en específico, se le otorgó la calidad de Agente Público de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21.192, lo que se tradujo en que a contar de ese momento quedó sujeta a responsabilidad administrativa y penal en el ejercicio de sus funciones y agregando además el contrato, la obligación de concurrir diariamente en días y horarios hábiles e inhábiles a las dependencias del ministerio. Por lo anterior, se le entregó credencial institucional y acceso a información privilegiada, manteniéndose en todo lo demás el contrato en cuanto a funciones a realizar y remuneración. Como señaló anteriormente, antes de la pandemia la principal función fue realizar trabajos en terreno recibiendo desde las jefaturas instrucciones directas, sin importar si estas actividades eran fuera del horario, fuera de la región o fines de semana. En este tiempo cumplía con un horario de trabajo, de 08:30 a 17:30, horario que era supervisado que fuera cumplido por mis jefes.

En el periodo de la pandemia, estuvo un mes en teletrabajo, donde se encontraba a cargo en campaña de entrega de alimentos en las municipalidades. En este sentido, llevaba un registro de las cajas que eran entregadas por los camiones y las entregas de estas que hacían los Municipios. Debía asistir al lugar



de trabajo correspondiente a las oficinas de la DOS ubicadas en calle Tucapel Jiménez N° 98, Santiago centro, salvo como se ha dicho aquel período en que estuve sometida a teletrabajo por motivo de las cuarentenas, pero siempre existió obligación de mantenerme a disposición y a las órdenes de su ex empleador durante la jornada. En ese mismo tiempo, fue a la Dirección del Trabajo de 3 comunas, donde las enviaban a atender a adultos mayores y personas con discapacidad para guiarlos en la forma de su atención, lo mismo en Centros de Vacunación, labores de "romper filas", pues su objetivo era atender a las personas que hacían largas filas para recibir atención de sus requerimientos, donde entregaban todos los elementos de protección personal y procuraba que la gente mantuviera la distancia.

Finalmente, se le renovó contrato el 03 de enero de 2022, el cual se extendía hasta el 31 de diciembre de 2022, por una renta bruta mensual de \$2.275.828, para realizar las mismas funciones señaladas en los contratos anteriores. Para efectos del pago de remuneraciones mensuales, debía generar un informe de las labores realizadas, informe que debía pasar por varios filtros para que su remuneración fuera cancelada.

El monto de la remuneración al momento de la desvinculación, que servirá de base para el cálculo de las indemnizaciones a las que tengo derecho, conforme al art. 172 del código del ramo, es la suma de \$2.275.828 pesos, de la cual se me efectuaba la retención del porcentaje legal por concepto de impuesto. La supervigilancia en el desempeño de las funciones, dar cuenta de la labor realizada, la obligación de ceñirse a pautas de dirección y organización que imparte el empleador. En dicha institución sus jefes fueron:

- Periodo 2018: Ministra era la Sra. Cecilia Pérez y el Director de la DOS era don Álvaro Pillado, Jefe departamento de Participación Ciudadana Srta. Valeria Pontti, coordinadora departamento srta. María Paz García.

- Periodo 2019: Ministra Sra. Karla Rubilar, Director de la DOS don Javier Acuña, Jefe departamento de Participación Ciudadana Sr. Ignacio Sánchez y luego don Rodrigo Cornejo, coordinadora departamento Srta. Francisca Saavedra.



- Periodo 2020 a 2022: Ministro Sr. Jaime Bellolio, Director de la DOS Sr. Jorge Fuentes, Jefe departamento de Participación Ciudadana Sr Rodrigo Cornejo, coordinadora departamento Srta. Francisca Becerra.

Dicha remuneración se le pagaba con una periodicidad mensual, junto con la cual debía entregar un informe de las actividades realizadas por la actora, para su respectiva evaluación y realizar la emisión de la respectiva boleta de honorarios a nombre del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Para el desempeño de labores contaba con una cuenta de correo electrónico institucional (claudia.lange@msgg.gob.cl). Asimismo, se le proporcionaba ropa también institucional (poleras, chaquetas, etc) junto con una credencial para identificarme frente a la comunidad como trabajadora de la DOS y del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Durante todo el tiempo que prestó servicios para el Ministerio Secretaría General de Gobierno desarrolló su labor de manera esmerada, responsable y eficiente. Su desempeño siempre fue bien valorado hasta el último día.

En cuanto a las circunstancias del término de la relación laboral, señaló que el día 25 de marzo, a eso de las 4:30 de la tarde, la jefa de Gabinete Cecilia Robledos, le señala que tenía que ir al departamento de Recursos Humanos ubicado en el denominado Edificio Moneda Bicentenario, ubicado en el Cívico (Teatinos 92). Al dirigirse a dicho edificio, se encontraba un abogado de la subsecretaría, el cual le señaló que la habían desvinculado y que tenía que firmar la carta en que los notifican de ello, la cual firmó y donde se señalaba que sus labores fueron consideradas accidentales, por tanto, que ponían término a sus servicios de forma inmediata, siendo que su contrato estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año 2022.

Respecto a la vulneración de derechos fundamentales indicó que a contar de la asunción de las nuevas autoridades, comenzó en la Subsecretaría una sistemática persecución en contra de todos aquellos funcionarios contratados y/o promovidos durante la administración del gobierno anterior o que pertenecieran a un partido político diferente a los que asumieron al nuevo gobierno, siendo éstos



objeto de diferentes actos discriminatorios por parte de las nuevas autoridades y jefaturas, los que buscaba el despido de funcionarios contratados durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En su caso, no solo es una militante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), sino que es dirigente de dicho partido, debido a que es secretaria de la directiva regional de la Región Metropolitana y en dicha calidad siempre he participado en forma activa en distintas actividades políticas, siempre realizadas fuera de los horarios en que laboraba para el Ministerio.

En este orden de cosas, evidente resulta que su adherencia política fue factor determinante para ser despedida ya que, como ha señalado, su labor siempre fue bien evaluada, lo cual explica los años que se mantuvo trabajando para la DOS. Tan evidente es que numerosos trabajadores vinculados a la UDI fueron también desvinculados de la DOS. Argumentar en contrario es inverosímil, porque el cargo al cual estaba vinculada sigue existiendo y se trata de un servicio satisfecho continuamente por la DOS. El inciso cuarto del artículo 2° del Código del Trabajo consagra explícitamente que es un acto de discriminación la distinción, exclusión o preferencia basada en motivo de opinión política, cuyo objeto sea anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. En este caso, el acto discriminatorio tuvo por consecuencia su desvinculación, privándome arbitraria e ilegalmente de su fuente de trabajo por el simple hecho de tener una preferencia política opuesta a la de las nuevas autoridades. De esta manera, el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, fija una regla fundamental, toda vez que le otorga rango constitucional al Principio de no discriminación en materia laboral y, por lo tanto, todas las normas del sistema jurídico deben ajustarse a esta disposición, sin perjuicio que, además, considera a la discriminación laboral como un ilícito a nivel constitucional.

Previas consideraciones legales y de derecho solicita se declare:

a) El reconocimiento de la relación laboral bajo vínculo de subordinación y dependencia, regulada por el Código del Trabajo (no de prestación de servicios a



honorarios) que la unió con la demandada desde el 11 de abril de 2018 hasta la fecha del despido el 25 de marzo de 2022;

b) Que el despido de que fue víctima fue un hecho discriminatorio y que vulneró gravemente sus derechos constitucionales;

c) Que su despido es nulo a título de sanción y por lo tanto se le deben las remuneraciones, cotizaciones y demás prestaciones que se devenguen desde la fecha del despido y hasta la fecha en que este sea convalidado con el pago efectivo e íntegro del total de las cotizaciones de seguridad social indicadas;

d) Que, como consecuencia de lo anterior, corresponde el pago de las siguientes indemnizaciones y prestaciones:

1. Indemnización por vulneración de derechos fundamentales, equivalente a 11 meses de remuneración que asciende a la suma de \$25.034.020 pesos;

2. Indemnización sustitutiva del aviso previo, ascendente a la suma de \$2.275.828 pesos;

3. Indemnización por años de servicio equivalentes a 4 años, ascendente a la suma de \$9.103.312 pesos;

4. Incremento de un 50% de la suma anterior, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 168 del Código del Trabajo, equivalente a \$4.551.656 pesos;

5. Feriado legal anual, correspondiente al periodo entre el 11 de abril de 2018 y el 11 de abril de 2021 (3 años = 45 días), ascendente a la suma de \$3.413.700 pesos;

6. Feriado proporcional correspondiente al período comprendido entre el 11 de abril de 2021 y el 25 de marzo de 2022 (11 meses y 14 días), ascendente a la suma de \$1.090.500 pesos;

7. Por concepto de lucro cesante, correspondiente a las remuneraciones que debieron ser pagadas desde la fecha de mi despido hasta el 31 de diciembre del año 2022 se demanda la suma de \$20.861.757 pesos;

8. Cotizaciones de AFP HABITAT, FONASA y AFC CHILE, por todo el tiempo que duró la relación laboral y las devengadas hasta la fecha de



convalidación del despido, para que sean cobrados por los organismos previsionales y de seguridad social que corresponda

9. Remuneraciones por nulidad del despido, desde la fecha del término de la relación laboral hasta la convalidación del despido en conformidad a lo dispuesto en el art. 162 del Código del Trabajo, hasta el pago efectivo de las cotizaciones de AFP, salud y seguro de cesantía (convalidación).

10. Todo lo anterior con reajustes e intereses y costas de la causa para el caso de que se formule oposición a esta demanda.

En subsidio a la denuncia de tutela planteada en lo principal, y para el caso que ésta no sea acogida, interpuso demanda subsidiaria por reconocimiento de la relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales.

Que por economía procesal se entienden reproducidos los mismos hechos en los que se sustenta la acción principal, solicitando el pago de Indemnización sustitutiva; Indemnización por años de servicio,; Incremento legal; Feriado legal y proporcional; lucro cesante, pago de Cotizaciones previsionales por todo el tiempo que duró la relación laboral y las devengadas hasta la fecha de convalidación del despido, para que sean cobrados por los organismos previsionales y de seguridad social que corresponda y la sanción de nulidad del despido, en los mismos términos y montos solicitados para la acción principal con reajustes, intereses y costas de la causa.

SEGUNDO: Que la denunciada, dentro del plazo legal, contestó la denuncia, solicitando su total rechazo, de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

En forma previa a las alegaciones de fondo, opuso excepción de prescripción. contenida en el inciso 1° del artículo 510 del Código del Trabajo del Código del Trabajo, norma, en virtud de la cual, al operar tiene como consecuencia que cualquier acción para demandar el feriado por el periodo anterior a los dos años anteriores al requerimiento se encuentra prescrita.



Respecto al fondo, indicó que la actora se vinculó con el Servicio mediante contratos a honorarios para el desarrollo de cometidos específicos, siendo contratada en un período como Agente Público. Dicha modalidad de contratación se encuentra destinada a aquellas personas que, por la naturaleza de las funciones encomendadas, tendrán responsabilidad penal y administrativa, quedando el contratado sujeto al Estatuto Administrativo. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Que entre los años 2018 y 2022, la demandante suscribió diversos contrato de honorarios, por lo que no existe relación laboral alguna, y dado que esta modalidad se enmarca dentro de lo regulado en el Estatuto Administrativo, es del todo improcedente declarar la existencia de la relación laboral. La denuncia de tutela laboral, así como la acción subsidiaria de declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones, carecen de todo sustento legal y fáctico, debiendo en consecuencia rechazarse en todas sus partes. La demandante se encontraba vinculada con el Fisco de Chile mediante contratos a honorarios conforme al artículo 11 del Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834.

Que la denunciada no ha ejecutado acto alguno que pueda ser considerado como vulneratorio de derechos fundamentales. En este contexto, resulta fundamental negar, en forma enfática y categórica, la afirmación desarrollada en el cuerpo del escrito de demanda, en orden a la existencia de actos de discriminación en contra de la demandante, y en particular que el término anticipado de su contrato de honorarios, haya implicado la vulneración de garantías constitucionales de la actora, encontrándose en definitiva su desvinculación plenamente ajustadas a derecho, justificada y motivada. En definitiva, la indemnización por tutela de derechos fundamentales y las prestaciones solicitadas, a saber, indemnizaciones de origen laboral, recargos, pago de cotizaciones previsionales y nulidad del despido, carecen de todo fundamento y sustento normativo, siendo por tanto improcedentes.



Señala que existe incompatibilidad de acciones, la acción de declaración de relación laboral con tutela de derechos fundamentales con ocasión del término de la misma; la acción de declaración de relación laboral con una de diversa naturaleza a la de tutela de derechos fundamentales, por cuanto existe norma expresa que limita el procedimiento, y el Tribunal sólo puede pronunciarse respecto de la acción de tutela de derechos fundamentales interpuesta debiendo, necesariamente, rechazar la de declaración de relación laboral, de lo contrario, estaría contraviniendo norma expresa en el sentido que no cabe la acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión.

Controvierte que entre las partes hubiese existido una relación laboral basada en un contrato de trabajo y regida por el Código Laboral y, por ende, la existencia de un presunto despido injustificado, y la procedencia de las indemnizaciones y prestaciones que se reclaman. Se controvierte la existencia de las pretendidas "remuneraciones" mensuales aludidas en el libelo, ya que se está en presencia del pago de una suma de dinero por concepto de honorarios, dividida en cuotas, por las que el actor emitió boleta de honorarios, por la que obtendrá sus devolución de impuesto a la renta, cuya naturaleza jurídica es enteramente diversa a la sostenida por la actora en su demanda. Por otra parte, no es efectivo que la cesación de los servicios profesionales se haya producido por despido injustificado ocurrido con fecha 25 de marzo de 2022, ya que la relación sub-lite concluyó por término anticipado de su convenio de honorarios, atendida la naturaleza de su contratación a honorarios.

Controvierte que exista vulneración de derechos fundamentales con ocasión del término del vínculo contractual a honorarios. En particular no existieron actos de discriminación por razones ajenas al desempeño de las funciones encomendadas. Se controvierte todos y cada uno de los supuestos indicios de laboralidad indicados en la demanda, toda vez que, y a contrario sensu, el Fisco en la contratación de la actora, ha dado estricto cumplimiento al artículo 11 de la Ley 18.834, toda vez que la demandante es contratada para



cumplir cometidos o funciones específicas señaladas en cada uno de los convenios a honorarios suscritos.

Rechaza que se adeuden a la demandante las prestaciones reclamadas en la demanda, tales como indemnización sustitutiva del aviso previo, año de servicio, recargo del 50%, vacaciones y cotizaciones previsionales. Asimismo, niega la existencia de deuda de cotizaciones de salud y la obligación de pagarlas, ya que conforme a los contratos de los años 2018 a 2021, era una obligación de la actora, el pago de las cotizaciones de seguridad social. No podría declararse que se adeudan cotizaciones ya que era obligación del prestador de servicio el pago directo de las cotizaciones de seguridad social, durante todo el período demandado, conforme lo establecen los convenios, hecho reconocido en sentencia de Recurso de Unificación Rol Corte 1.597-2020.

En subsidio de lo anteriormente señalado, y para el evento que se considere que en el caso en estudio la situación fáctica en que la actora prestó servicios para el servicio demandado no se ajustaba a los términos del artículo 11 del Estatuto Administrativo, sería un acto ilegal de la administración cuya sanción sería la nulidad del contrato a honorarios, más no su transformación en un contrato de trabajo.

La demandante pretende que la existencia de sucesivos contratos a honorarios generara una legítima expectativa de relación contractual permanente y constante entre las partes, que asimila -erróneamente- a una relación contractual regida por el Código del Trabajo, lo que a juicio de la demandada es errado.

Acerca de la inexistencia de supuestos actos indiciarios de vulneración de derechos fundamentales, refiere que en la denuncia se observa una exposición abstracta, inconexa con los hechos contenidos en el capítulo correspondiente, donde no se indica específicamente de qué forma el Servicio habría vulnerado dichas garantías fundamentales. Por ello, estimamos que la acción de tutela debe ser rechazada, por cuanto no cumple con los requisitos establecidos por la ley para su interposición, pues no contiene la enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada, en tanto no existe una explicación



de cómo aquel habría vulnerado, con ocasión del término del contrato de honorarios.

Cabe destacar que la denunciante de autos no ha identificado ningún indicio efectivo, serio y razonable de conducta lesiva de la demandada, fuera de expresar que no acepta el término de su contrato de honorarios.

TERCERO: Que se celebró la audiencia preparatoria, oportunidad en que la demandante evacuó el traslado de la excepción de prescripción dejándose para definitiva su resolución. Que el Tribunal llamó a las partes a conciliación proponiendo al efecto bases concretas de un posible acuerdo, el cual no prosperó.

A continuación de establecieron como hechos no controvertidos los siguientes:

1. Que la actora prestó servicios para el Fisco, en el periodo de 11 de abril del año 2018 y el 25 de marzo de 2022, para el Ministerio de Secretaría General de Gobierno.

2. Que la actora por los servicios prestados otorgó boletas de honorarios a la demandada.

Posteriormente el tribunal recibió la causa a prueba, fijándose como hechos, sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes hechos a probar:

1. Si la relación contractual que vinculo a las partes de este juicio tiene el carácter de laboral en los términos del artículo 7° y 8° del Código del Trabajo como lo sostiene la demandante o si por el contrario tiene el carácter de contratos a honorarios, regulado por normas administrativas. Hechos o circunstancias que así lo demuestran en una u otra hipótesis

2. En su caso en el evento que se determine que es una relación laboral, estipulaciones de la misma, esto es, remuneraciones pactada, funciones desempeñadas por la actora, jornada de y trabajo a la que estaba sujeta, lugar o establecimiento donde cumplía sus funciones.

3. En su caso, causas del término de la relación contractual. Hechos, pormenores y circunstancias.



4. En su caso, si la actora hizo uso del feriado legal que reclama o si por el contrario, este le fue compensado en dinero. Situación acaecida con el feriado proporcional.

5. En su caso, si la demandada denunciada le adeuda a la trabajadora las cotizaciones de seguridad social por todo el periodo discutido.

6. Efectividad de que a la actora se le adeuda por concepto de su relación contractual, los meses de mayo a diciembre del año 2022.

7. Efectividad de haber sido la denunciante objeto de vulneración de garantías fundamental con ocasión del término de sus servicios, en la afirmativa, circunstancias. Esto es en relación al principio de la no discriminación.

CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en:

I.- Documental:

Incorporó mediante lectura los siguientes documentos no objetados de contrario:

1. Decreto exento RA N°411/371/2018 de fecha 31 de julio del año 2018 que aprueba la contratación de la demandante.

2. Decreto exento RA N°411/286/2018 de fecha 23 de octubre del año 2018.

3. Decreto exento RA N°411/8/2019 de fecha 31 de enero del año 2019

4. Decreto exento RA N°411/138/2020 de fecha 29 de enero del año 2020

5. Decreto exento RA N°411/303/2020 de fecha 12 de junio del año 2020

6. Decreto exento RA N°411/186/2021 de fecha 19 de febrero del año 2021

7. Decreto exento RA N°411/536/2021 de fecha 23 de diciembre del año 2021

8. Contrato a honorarios a suma alzada entre la actora y el Ministerio Secretaría General de gobierno de fecha 11 de abril del año 2018

9. Contrato a honorarios a suma alzada entre la actora y el Ministerio Secretaría General de gobierno de fecha 31 de mayo del año 2018



10. Contrato a honorarios a suma alzada entre la actora y el Ministerio Secretaría General de gobierno de fecha 02 de enero del año 2019

11. Contrato a honorarios a suma alzada entre la actora y el Ministerio Secretaría General de gobierno de fecha 02 de enero del año 2020

12. Contrato a honorarios a suma alzada entre la actora y el Ministerio Secretaría General de gobierno de fecha 30 de abril del año 2020

13. Contrato a honorarios a suma alzada entre la actora y el Ministerio Secretaría General de gobierno de fecha 04 de enero del año 2021

14. Contrato a honorarios a suma alzada entre la actora y el Ministerio Secretaría General de gobierno de fecha 29 de octubre del año 2021

15. Boletas de Honorarios electrónicas, emitidas por la demandante al Ministerio Secretaría General de Gobierno, entre abril del 2018 y marzo de 2022;

16. Decreto Exento TRA N°411/294/2022 que aprueba término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada emitido con fecha 25 de marzo del año 2022

17. Carta de aviso de terminación anticipada de contratación a honorarios de doña Claudia Lange Farías, fecha 25 de marzo del año 2022

18. Certificado de afiliación política de la demandante, emitido por el Servicio Electoral, de fecha 03 de junio de 2022;

19. Set de 3 fotografías de ropa institucional entregada a la demandante para el ejercicio de sus labores;

20. Set de 4 fotografías de la demandante en el desempeño de sus labores;

21. Fotografía de credencial institucional de la actora.

I.- Confesional.

Se citó a absolver posiciones personalmente al representante legal de la demandada al tenor de lo dispuesto por el art 4° del Código del Trabajo. Al efecto compareció Patricio Ricardo Mena Medina quien previamente juramentado prestó declaración y cuyo testimonio consta íntegramente en el registro legal de audio del juicio.

III.- Testimonial.



Rindió la testifical de Macarena Del Pilar Escala Carrasco y Gisela Andrea Vila Ruz quienes previamente juramentadas prestaron declaración y cuyos testimonios constan íntegramente en registro legal de audio del juicio.

IV.- Exhibición de documentos.

1. Copias de la totalidad de los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos entre la demandante doña CLAUDIA ANGELA LANGE FARIAS y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, por el período comprendido entre el 11 de abril del año 2018 y el 25 de marzo del año 2022.

2. Copias de la totalidad de las Resoluciones o Decretos que aprueban la contratación de la demandante, bajo la modalidad de honorarios, con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, por el período comprendido entre el 11 de abril del año 2018 y el 25 de marzo del año 2022.

3. Informes mensuales de actividades realizados por doña CLAUDIA ANGELA LANGE FARIAS entre el 11 de abril del año 2018 y el 25 de marzo del año 2022.

4. Nómina de personal despedido y contratado en la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, ya sea en calidad de planta, contrata y honorarios, entre el 25 de marzo de 2022 y el 20 de junio de 2022.

La parte demandante indica respecto al documento N° 4 que se encuentra cumplido parcialmente y solicita el apercibimiento legal.

QUINTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte denunciada rindió los siguientes medios de prueba:

I.- Documental:

Incorporó los siguientes documentos no objetados de contrario consistentes en:

1. Contrato de honorarios de la actora de fecha 11.04.2018. Ministerio Secretaria General de Gobierno.

2. Contrato de honorarios de la actora de fecha 31.05.2018. Ministerio Secretaria General de Gobierno.



3. Contrato de honorarios de la actora de fecha 02.01.2019. Ministerio Secretaria General de Gobierno.

4. Contrato de honorarios de la actora de fecha 02.01.2020. Ministerio Secretaria General de Gobierno.

5. Contrato de honorarios de la actora de fecha 30.04.2020. Ministerio Secretaria General de Gobierno.

6. Contrato de honorarios de la actora de fecha 04.01.2021. Ministerio Secretaria General de Gobierno.

7. Contrato de honorarios de la actora de fecha 29.10.2021. Ministerio Secretaria General de Gobierno.

8. Contrato de honorarios de la actora de fecha 03.01.2022. Ministerio Secretaria General de Gobierno.

9. Decreto Exento RA N° 411/371/2018, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.

10. Decreto TRA N° 411/286/2018, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.

11. DECRETO TRA N° 411/8/2019, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.

12. Decreto Exento RA N° 411/138/2020, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.

13. Decreto Exento RA N° 411/303/2020, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.

14. Decreto Exento RA N° 411/539/2021, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.

15. Decreto Exenta RA N° 411/186/2021, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.

16. Decreto Exento RA N° 411/536/2021, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.

17. Decreto Exento RA N° 411/55/2022, aprueba contrato(s) a honorarios a suma alzada de persona(s) que indica. Subsecretaria General de Gobierno.



18. Decreto Exento RA N° 411/294/2022, Término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada. Subsecretaría General de Gobierno.

19. Boletas de honorarios e Informes de desempeño de la actora años 2018 a 2022 (66 documentos).

II.- Exhibición de documentos.

1. todas las boletas a honorarios emitidas a nombre de la Secretaría General de Gobierno y/o Ministerio Secretaría General de Gobierno entre los años 2018 y 2022;

2. La declaración anual de impuestos presentada ante el Servicio de Impuestos Internos correspondiente a los años 2018 a 2022, que contengan las solicitudes de devolución de montos retenidos por emisión de boletas de honorarios por rentas de los años tributarios señalados.

La parte demandada indica que se encuentra cumplido parcialmente y solicita el apercibimiento correspondiente.

III.- Oficios: AFP HABITAT– AFP Provida, FONASA y AFC CHILE.

SEXTO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, permiten a este tribunal arribar a las siguientes conclusiones y tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:

Que constituye hechos no controvertidos y suficientemente acreditados la circunstancia que la actora se vinculó con el Ministerio Secretaria General de Gobierno mediante contratos de honorarios a suma alzada para la ejecución de cometidos y funciones específicas para lo cual fue contratada entre los años 2018 y 2022 -dentro de ese período en calidad de Agente Público- al amparo del marco jurídico y legal del Estatuto Administrativo, modalidad de contratación destinada a funcionarios que por la naturaleza de sus funciones, tienen responsabilidad penal y administrativa.

En efecto, como se desprende principalmente de la prueba documental aportada por ambas partes al juicio, sumado a las declaraciones de los testigos de



la actora y la confesional rendida por la denunciada, esto es; Decreto Exento RA N° 411/371/2018; RA N° 411/286/2018; RA N° 411/8/2019; RA N° 411/138/2020; RA N° 411/303/2020; RA N° 411/539/2021; RA N° 411/186/2021; RA N° 411/536/2021; RA N° 411/55/2022; RA N° 411/294/2022 que aprueban contratos a honorarios a suma alzada; los contratos de honorarios de la actora de fecha 11.04.2018; 31.05.2018; 02.01.2019; 02.01.2020; 30.04.2020; 04.01.2021; 29.10.2021 y 03.01.2022; Boletas de honorarios e Informes de desempeño de la demandante de los años 2018 a 2022; cabe señalar que la actora suscribió convenios a honorarios con dicho Servicio el 11 de abril de 2018, prestación de servicios que se renovó en forma sucesiva hasta el 25 de marzo de 2021, fecha en que concluyó el contrato de honorarios por término anticipado como se observa de los documentos Decreto Exento TRA N°411/294/2022 que aprueba término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada emitido con fecha 25 de marzo del año 2022 y la carta de aviso de terminación anticipada de contratación a honorarios de la actora de la misma fecha.

Que conforme a la misma prueba documental es posible apreciar que en el contrato suscrito entre el 1 de mayo al día 31 de diciembre de 2020, la demandante fue contratada para prestar servicios como Agente Público y en este sentido se asimila a la calidad de funcionario público de acuerdo al Estatuto Administrativo.

De esta forma como se describe en dichos decretos y contratos a honorarios a suma alzada, el contrato suscrito entre el 11 de abril de 2018 y el día 31 de mayo de 2018, bajo el decreto aprobatorio N° 411/371/2018 de fecha 31 de julio de 2018, la actora se desempeñó como prestador de servicios ocasionales en dependencias de la División de Organizaciones Sociales y tenía la función de desarrollo y relatoría de contenidos de capacitaciones y escuelas desarrolladas por la División de Organizaciones Sociales y apoyo en gestión territorial percibiendo una remuneración: \$1.333.333 y \$2.000.000, respectivamente. Luego, el contrato suscrito entre el 1 de junio de 2018 y el día 31 de diciembre de 2018, bajo el Decreto Aprobatorio N° 411/286/2018 de fecha 23 de octubre de 2018,



contemplaba como función del prestador de servicios ocasionales, siempre en el mismo Servicio, la de apoyar y asesorar la ejecución de las actividades del programa específico Diálogos Participativos con una remuneración de \$2.000.000. Que respecto al contrato suscrito entre el 1 de enero de 2019 y el día 31 de diciembre de 2019 bajo el Decreto Aprobatorio N° 411/8/2019 de fecha 31 de enero de 2019 entregaba como función de la persona contratada en la misma División, la específica de asesoría territorial, programática y logística para la realización de Capacitaciones y Diálogos de la División de Organizaciones Sociales con una remuneración: \$ 2.070.000. Asimismo, el contrato suscrito entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, bajo el Decreto Aprobatorio N° 411/138/2020 de fecha 29 de enero de 2020 entregaba a la prestadora de servicios la función de Asesoría territorial, programática y logística para la realización de Capacitaciones y Diálogos de la DOS con una remuneración de \$ 2.127.960. También, en el suscrito entre el 1 de mayo de 2020 y 31 de diciembre de 2020 bajo Decreto Aprobatorio N° 411/303/2020 de fecha 12 de junio de 2020, la actora designada como Agente Público, en la División de Organizaciones Sociales debía ejercer las funciones de Asesoría territorial, programática y logística para la realización de Capacitaciones y Diálogos de la DOS con una remuneración de \$ 2.127.960. Luego, el suscrito entre el 01 de enero de 2021 y el día 31 de octubre de 2021 como se desprende del Decreto Aprobatorio N° 411/186/2021 de fecha 19 de febrero de 2021, la actora debía ejecutar la función de Asesoría territorial, programática y logística para la realización de capacitaciones y diálogos participativos y ciudadanos de la División de Organizaciones Sociales con una remuneración de \$ 2.144.984. En el contrato suscrito entre 01 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021 bajo el Decreto Aprobatorio N°411/536/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021, la función de la actora consistía en Asesoría territorial, programática y logística para la realización de capacitaciones y diálogos participativos y ciudadanos de la División de Organizaciones con una remuneración de \$ 2.144.984. Finalmente, en el suscrito entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 conforme al Decreto



Aprobatorio N° 411/55/2022 del 17 de febrero 2022, la función de la contratada en la División de Organizaciones Sociales contemplaba la Asesoría territorial, programática y logística para la realización de capacitaciones y diálogos participativos y ciudadanos de la División de Organizaciones con una remuneración de \$ 2.275.828.

En consecuencia del detalle de dichos instrumentos se aprecia que la actora fue contratada en calidad de honorarios entre los años 2018 y 2022; que debía desarrollar sus labores en los términos estipulados por las partes en cada ocasión en los respectivos contratos a honorarios y que no realizaba más funciones que aquellas expresamente contenidas en los contratos a honorarios. Asimismo, la supervisión a la que aluden dichos instrumentos y la entrega de Boletas de honorarios e Informes de desempeño, conforme deriva de tales antecedentes y de los dichos de la testigo Gisela Vila, tenía como propósito asegurar que las labores específicas y transitorias encomendadas a la actora se efectuaran en forma completa y con sujeción a las estipulaciones en los respectivos instrumentos. En efecto, la testigo corroboró aquello al señalar que la actora era la coordinadora del departamento de diálogo y escuela de capacitación, que ella representaba a las funcionarias y tenía la coordinación con el Director, la actora les entregaba la información y diligencias que debían hacer las funcionarias pero era la actora quien impartía órdenes y entregaba la información, aseveraciones que van en el mismo sentido que la declaración de la testigo Macarena Escala.

En este orden de ideas, los contratos celebrados entre las partes precisaron que eran contratos de honorarios a suma alzada, cuya finalidad se estipulaba literal y expresamente en cada uno de ellos con la declaración manifiesta que los servicios se contrataban sobre la base de honorarios a suma alzada, pagaderos previa presentación de boletas de honorarios y que tales contratos suscritos por la actora establecían funciones específicas. Lo que es coherente con la circunstancia que la actora estuvo sujeta a las obligaciones y derechos tributarios de los profesionales a honorarios por cuanto emitió boletas de honorarios; la actora



declaraba y pagaba impuesto como independiente, esto es, el pago del impuesto global complementario y no el de segunda categoría, que es propio del contrato de trabajo, asimismo realizaba pagos provisionales mensuales y percibía la devolución de ellos, cuestión propia de los contratos a honorarios y ajena al contrato de trabajo. También, el pago de los honorarios quedaba supeditado a la entrega de la boleta y del informe mensual como se ilustró precedentemente, condición que no se observa en el contrato de trabajo. Es relevante, lo estipulado en la cláusula sexta de los contratos, en el sentido que los costos de previsión social eran de cargo exclusivo del prestador de servicios especiales, no existiendo responsabilidad alguna del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Es posible concluir que en la vinculación jurídica de la actora con el Ministerio no se presentan las características del vínculo de subordinación y dependencia, por cuanto la demandante no participa de un marco disciplinario específico y precisamente el hecho de que deba emitir un informe junto a su boleta de honorarios es la evidencia más clara de la ausencia del poder de dirección y subordinación en sus labores y por el contrario refleja autonomía en la ejecución de su prestación. Así, la justificación de una supervisión constante excluiría entonces la condición (estipulación) del informe.

Por otra parte, la demandante apela constantemente tanto en la demanda como en sus interrogatorios a los testigos, sobre la circunstancia de gozar de beneficios o derechos asimilables a los otorgados con motivo de la celebración de un contrato de trabajo. No obstante, si bien en los contratos a honorarios de la actora se establecen beneficios de ese orden (licencias prenatal y postnatal) deben entenderse dentro del marco regulatorio que rige a las partes como es el contrato de honorarios pactado con la actora, que siempre se establece en beneficio para las partes, pero que en ninguna caso puede significar la transformación de un contrato de honorarios en un contrato de carácter laboral. Por lo demás, tales beneficios, como permisos administrativos o feriados, no son exclusivos de los contratos de trabajo, lo que es habitual extender a los contratos a honorarios algunos beneficios pactados en los contratos de trabajo.



En suma, en el cumplimiento de los servicios la actora nunca estuvo sujeta a instrucciones directas y permanentes de un superior inmediato, por cuanto la demandante emitía un informe mensual, atendiendo directamente a los cometidos de sus respectivos convenios como prestadora con conocimiento especializado de las materias propias para las que fue contratada.

Que respecto al punto sobre jornada de trabajo, queda claro de la testimonial y documental rendida que la actora nunca estuvo sujeta a jornada de trabajo dada su calidad contractual de funcionaria a honorarios, pues nunca firmó o estuvo sometida a un registro escrito, libro de ingreso y salida u otro sistema biométrico de registro de asistencia, por cuanto los contratos de honorarios no estipulaban una jornada de trabajo, ni obligación de marcaje de ingreso y salida. Cosa distinta que en la cláusula quinta se estipulara que el prestador de servicios ocasionales, tendrá derecho a concurrir a las dependencias del Ministerio durante días y horas hábiles, o inhábiles previo acuerdo con su monitor o guía, con el objeto de desarrollar las actividades necesarias propias de la prestación de servicios ocasionales para la cual fue convocada. No obstante, asistirá diariamente si de la naturaleza de tales servicios especiales se deriva que su concurrencia es necesaria todos los días o que tales servicios deben ejecutarse en dependencias de la Secretaría de Estado.

Que el uso de vestimenta institucional, credenciales de acceso a una entidad gubernamental y el uso de un correo institucional, características que resalta la demandante como elementos que configurarían dicha subordinación y dependencia con la demandada, no necesariamente implican la existencia de un vínculo laboral, y si bien tales elementos sirven al propósito de cumplir de mejor forma la prestación de servicios de cometidos específicos; esto es, identificación del servicio que otorga el Estado con los particulares; la comunicación indispensable entre los estamentos públicos y dentro del Servicio para la ejecución de la prestación e incluso sólo por temas de seguridad dentro de un recinto público, como es el uso de una credencial de identificación, estos no son esenciales en el caso analizado para determinar la existencia de una relación de



carácter laboral entre las partes, por cuanto, lo cardinal lo constituye el marco jurídico y legal al que han adherido las partes y que emana de las mismas estipulaciones de los convenios aprobados entre estas. Por lo demás, la Jurisprudencia ha resuelto que los contratados a honorarios pueden ser comisionados al extranjero, aplicárseles las disposiciones protectoras de la maternidad, concurrir a cursos de capacitación y gozar de feriados, licencias médicas y permisos, siempre que ello se estipule en los correspondientes convenios y que tales beneficios no sean superiores a los contemplados para los servidores públicos regidos por el Estatuto Administrativo.

Luego, de la descripción de dichos instrumentos no es posible establecer la existencia de este elemento esencial, esto es, que la ejecución de los cometidos se realizó bajo pautas de dirección y organización, como las que imparta un empleador; o que la actora haya estado sujeta a dependencia técnica y administrativa que se traduzca directamente en instrucciones y controles sobre la forma y oportunidad de la ejecución de dichos cometidos por parte de la prestadora de servicios. Esto último, se aprecia categóricamente de la declaración de la testigo Gisela Vila al expresar que la actora en su rol de Jefa y Coordinadora, impartía órdenes y entregaba la información a las funcionarias del Servicio y les indicaba que debían hacer.

En suma, la vinculación de una persona con el Estado o sus órganos y servicios, en base a honorarios, se encuentra expresamente regulada por el referido artículo 11 del Estatuto Administrativo, y en el caso de marras, la facultad de contratar que confiere el citado inciso 2°, se refiere a "cometidos específicos", esto es, preestablecidos o determinados, y no exclusivos o excluyentes. Así, los convenios a honorarios a suma alzada celebrados por la actora, son claros en establecer cuáles fueron dichos cometidos y la imposibilidad de llevarlos a cabo con los recursos humanos del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Que en cuanto al término de los servicios prestados, cabe señalar que la relación estatutaria concluyó por aplicación de la cláusula décimo tercera: "*De las causales de término anticipado del contrato*" que refiere que "... *sin perjuicio del*



período de vigencia del presente contrato, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado y sin expresión de causa, dando aviso por escrito a la otra parte de su intención en tal sentido. En la eventualidad que se ponga término anticipado a las funciones que realiza el prestador de servicios ocasionales, antes de llegado el último día del mes, se rebajará el honorario a suma alzada de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado, debiendo pagarse sólo el monto correspondiente a dicho lapso.”. En este sentido, la actora fue notificada con fecha 25 de marzo del año 2022, que se pondría término anticipado a su contrato de Honorario a Suma Alzada para el año 2022, conforme al Decreto Exento RA N° 411/294/2022 aportado por ambas partes al proceso.

Que es un dicho cuerpo legal donde se explicitan las razones del término anticipado a su contrato de Honorario, destacando entre otras consideraciones las siguientes:

“... Que, el conocido cambio de administración, realizado con fecha 11 de marzo del año en curso, produjo en este servicio, y en particular en su División de Organizaciones Sociales, regulada en el artículo 3° del DFL N° 1, de 1992, que Modifica Organización del Ministerio Secretaría General de Gobierno, un importante cambio de lineamientos, dado por las autoridades entrantes y un nuevo enfoque que se pretende dar a esta importante división, que se erige como uno de los pilares en la estructura orgánica de esta Secretaría de Estado.

... Que, si bien, la referida prestadora de servicios se encuentra en una calidad jurídica diversa, no podemos dejar de mencionar, que el presente acto administrativo se encuentra fundado al tenor de lo señalado en el dictamen N°6.400, de fecha 2 de marzo de 2018, de la Contraloría General de la República: "podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros:

- La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle



funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario..." principio según el cual los contratos no son inmutables, siendo susceptibles de modificación en caso de que cambien las circunstancias según las cuales se contrató inicialmente.

De ahí, y considerando el perfil de la Sra. Lange, quien no cuenta el perfil técnico que se precisa para sus funciones, no siendo una profesional del área, más si poseyendo una importante retribución pecuniaria propia de encargados de área de perfil profesional, se hace insostenible su permanencia en la División de Organizaciones Sociales, que producto tanto de su reorganización, llevada a cabo mediante la resolución exenta N° 272/272, de 23 de marzo de 2022, como del cambio de lineamientos proveniente de las autoridades de dicha repartición, se ve en la necesidad de adecuar el personal a las necesidades sobrevivientes para su funcionamiento.

... Que, atendidos el perfil y competencias de la servidora, estos no resultan compatibles para ejecutar los objetivos programáticos gubernamentales implementados a contar del cambio de administración, que se han tornado imperativos para el ejercicio del cargo de la Sra. Lange con la reorganización realizada en la División.

... Que, en este contexto, el contrato a honorarios a suma alzada vigente no es posible de mantener, al haber cambiado sustancialmente las condiciones bajo las cuales se contrató a la servidora en comento, significando un menoscabo para el funcionamiento de la reorganizada División de Organizaciones Sociales la mantención de una persona con remuneración propia de encargada de área, no pudiendo en consecuencia operar de manera óptima, afectando a las miles de personas pertenecientes a organizaciones comunitarias que se relacionan diariamente con este servicio.

... Que, el conocido cambio de administración, realizado con fecha 11 de marzo del año en curso, produjo en este servicio un importante cambio de lineamientos y reorganización de prioridades que resultan en la readecuación de la programación y directrices de esta Secretaría de Estado.



... Que, en este contexto, el contrato a honorarios a suma alzada vigente no es posible de mantener, al haber cambiado sustancialmente las condiciones bajo las cuales se contrató al servidor en comento, significando un menoscabo para el funcionamiento de la División de Organizaciones Sociales la mantención de un vínculo contractual con una persona cuyo Departamento de Origen ha dejado de existir, no pudiendo en consecuencia operar de manera óptima.

... Que, en suma, en estas circunstancias, los servicios contratados que cumple doña CLAUDIA LANGE FARÍAS, RUN N° 13.053.274-8, no son necesarios para este Ministerio, al tenor de lo descrito en las funciones de su contrato.

... Que, en la actualidad, debido a la reorganización, no existe otra plaza disponible con funciones a las cuales pudiera ser reasignada conforme a las necesidades del servicio, razón por la cual se procederá a resolver su contrato de honorarios suscrito con fecha 3 de enero de 2022."

SEPTIMO: En razón de lo anterior, no logra convencer al Tribunal respecto de la extralimitación del marco legal en las contrataciones de la demandante. Asimismo, las funciones encomendadas tampoco pueden estimarse como "permanentes" para el Ministerio Secretaría General de Gobierno, por cuanto, estos se destinan a un programa específico, que debe tener un plazo de implementación y ejecución determinado, sujeto a evaluación, fondos y políticas públicas de los diferentes gobiernos, por lo que la situación de la actora se enmarca en un plan que habilita calificar su función como un cometido específico, en los términos del artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Que toda prestación de servicios personales, cualquiera sea su origen, tiene como contrapartida una remuneración habitualmente de carácter mensual que en la especie la actora efectivamente percibía de la Administración del Estado, siempre contra la entrega de una boleta de honorarios y el respectivo informe detallado de actividades, tal como corroboró la documental aportada por ambas partes al juicio.



OCTAVO: Que en la controversia suscitada, debe tenerse presente que la ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado artículo 2° prescribe que: *“Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico”*.

NOVENO: Que conforme lo dispone el artículo 1° del Estatuto Administrativo, las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, se regularán por dicho cuerpo legal y en él se puede distinguir el establecimiento de cargos de planta, contrata y contrato de honorarios.

DECIMO: Que el artículo 11 de la Ley 18.834, establece que los servicios sujetos al Estatuto Administrativo pueden contratar personal sobre la base de honorarios, cuando deban realizar labores accidentales y que no sean habituales en la institución, además de la realización de cometidos específicos, rigiéndose por las reglas que establezca el respectivo contrato, no siéndoles aplicables las disposiciones del Estatuto.

UNDECIMO: Que por su parte el artículo 1° inciso segundo y tercero del Código del Trabajo establece que *“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial*.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”

DUODECIMO: Que conforme lo antes señalado y conforme a los hechos que se han tenido por establecidos, es posible determinar que la actora fue contratada a honorarios, suscribiéndose los convenios respectivos, por diversos



periodos de tiempo y para funciones determinadas descritas en la contratación de honorarios a suma alzada, como refieren la documental, confesional y testimonial rendida en la audiencia de juicio.

DECIMO TERCERO: Que de acuerdo a lo antes referido, la demandante desarrolló sus servicios para la demandada como se señaló, conforme a sucesivos contratos a honorarios, los que se desarrollaron de acuerdo señalan los propios documentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, que establece claramente que se regirá por las normas del propio contrato y no por dicho Estatuto, ni por el Código del Trabajo.

De esta forma, la demandante fue contratada para cometidos específicos en labores accidentales que no son habituales del Servicio, como fueron las descritas precedentemente en cada uno de los contratos a honorarios reseñados en el motivo sexto de esta sentencia correspondiente a los programas de desarrollo social en la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

DECIMO CUARTO: Que por otra parte si bien el inciso 3° del artículo 1° consagra la aplicación de las normas del Código del Trabajo a los funcionarios que integran la administración del Estado, la misma es del todo supletoria a los estatutos especiales que los mandan y restringidas a los aspectos o materias que estos no contemplan y siempre que no fueran contrarias a la normativa, situación que no ocurre en la especie por cuanto en autos no se trata de hacer efectivas las normas del cuerpo legal mencionado en aquellos en defecto de las disposiciones estatutarias a la que está sometido, sino de encuadrar la situación de la actora a toda la normativa que contiene dicho Código, en circunstancias que sus servicios se ejecutaron merced de una modalidad prevista y autorizada por la ley que rige a ese organismo, según se desprende de los contratos agregados a estos autos.

DECIMO QUINTO: Que, aun cuando los servicios prestados por la demandante se hayan retribuido con un honorario mensual y en forma ininterrumpida por más de un año, ninguna de estas circunstancias hace aplicable a su situación la disposición del artículo 7° del Código del Trabajo ni otras normas



de este texto legal, por cuanto esas condiciones pueden pactarse en un contrato remunerado con honorarios, a cuyas reglas se remite explícitamente el referido inciso final del artículo 11 de la Ley N° 18.834, al definir el sistema jurídico propio de las personas contratadas a honorarios, que prescribe que: *"Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto".

De esta manera, la contratación a honorarios para fines específicos, cuyo es el caso, exige como condición que se trate de labores accidentales y que no sean habituales de la Institución, lo que ocurre en la especie, pues se trata de servicios prestados en el marco de convenios desarrollados por el Estado a fin de cumplir con ciertos objetivos y políticas impulsadas por el Gobierno.

Que respecto a *"labores accidentales"* debe entenderse que son aquellas tareas puntuales, precisas y determinadas circunscritas a un objetivo especial, en este caso, las funciones de la actora eran limitadas a cierta materia, como rezan los contratos referidos, funciones que no constituyen el carácter de permanentes y habituales del órgano gubernamental al que se demanda.

DECIMO SEXTO: Que no desvirtúa lo asentado en el motivo anterior la circunstancia que las partes hayan pactado en los contratos de prestación de servicios a honorarios, beneficios que pudieran asimilarse a los contenidos en el Código del Trabajo, porque ello se encuentra dentro del contexto del acuerdo de voluntades, sin alterar la naturaleza del vínculo contractual.



DECIMO SEPTIMO: Cabe hacer presente que la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de Unificación de Jurisprudencia Laboral, rol N°6.335-2009, de 10 de noviembre de 2009, ha declarado, unificando jurisprudencia, que los contratos de prestación de servicios celebrados de conformidad al artículo 4° de la Ley N°18.883, norma símil a la estatuida en el artículo 11 inciso 2° de la Ley N°18.834, se regulan por las normas contenidas en el propio contrato, sin que le sean aplicables las normas del Estatuto Administrativo, ni las disposiciones del Código del Trabajo.

DECIMO OCTAVO: Que al no haberse establecido la existencia de una relación laboral bajo un vínculo de subordinación y dependencia, se omitirá pronunciamiento respecto de lo demandado por concepto del pago de las cotizaciones de seguridad social y previsional; del despido injustificado invocado; pago de indemnizaciones y recargos legales, de feriados y lucro cesante.

DECIMO NOVENO: Que en consecuencia, y al no ser aplicables las normas del Código del Trabajo a la demandante, se procederá a rechazar la demanda en todas sus partes, pues como ya se dijo, el estatuto jurídico que vinculó a las partes fue desde siempre en base a contratos de honorarios, rigiendo en su respecto las normas del Código Civil.

VIGESIMO: Que en cuanto a la denuncia, *con ocasión del despido*, sobre vulneración de derechos fundamentales de la denunciante, esto es, actos arbitrarios de discriminación por pensamiento político, militancia política o libertad de opinión política, derechos consagrados en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República en relación al artículo 2° del Código del Trabajo que prohíbe la discriminación en sede laboral al establecer que no se permite la discriminación que no se base en la idoneidad y capacidad; cabe señalar que la actora sustenta tal vulneración en la circunstancia que se despidiera a trabajadores a honorarios que habían ingresado a prestar servicios en el gobierno anterior y la circunstancia de su adhesión política y militancia del partido Unión Demócrata Independiente dirigente de dicho partido, secretaria de la



directiva regional de la Región Metropolitana con participación activa en actividades políticas contraria a la ideología de la nueva administración.

Al respecto cabe indicar que del tenor literal del libelo se observa que la actora no explica de qué forma el término anticipado de su contrato de honorarios implicaría un acto arbitrario de discriminación, limitándose a invocar ambas normas y señalando -sin nexo de conexión alguna- que habría sido discriminada sólo por militancia en un partido político de oposición al pensamiento político del Gobierno.

En efecto, aun la prueba aportada de carácter testimonial no entrega información, circunstancias o contexto situacional, cómo o de qué forma, la decisión de la autoridad de poner término anticipado al contrato de honorarios de la actora sería la consecuencia o manifestación de esta discriminación por pensamiento político, militancia política o libertad de opinión política; y si bien, Macarena Escala y Gisela Vila, en forma muy escueta, sin precisión y detalles refieren que en ese período varios funcionarios salieron del Ministerio por temas políticos, que se les informó que había cambio de administración a un gobierno de izquierda y que ellos no eran personas de confianza para la división; lo cierto es que la actora, en el fondo no estuvo de acuerdo con la decisión de la autoridad de terminar anticipadamente su contrato.

Por otra parte, la prueba no logra establecer alguna motivación política específica de desvinculación y con la exhibición, aun parcial, de la nómina de personal despedido y contratado en la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en calidad de planta, contrata y honorarios del año 2022, da cuenta de las razones del término anticipado por el Servicio para una readecuación de funciones lo que fue corroborado por el absolvente de la denunciada Patricio Mena al expresar que existieron desvinculaciones de varios funcionarios por restructuración de la División de Organizaciones Sociales en consideración a la nueva administración de gobierno que entregaba nuevos lineamientos en dicha área.



Que respecto al certificado de afiliación política de la demandante, emitido por el Servicio Electoral de fecha 03 de junio de 2022, sólo da cuenta de la militancia política de la actora, pero dicho antecedente no logra relacionarse con las consideraciones expresadas en el Decreto Exento TRA N°411/294/2022 que aprueba el término anticipado de convenio de honorarios a suma alzada emitido con fecha 25 de marzo del año 2022, en especial, que la funcionaria no cuenta con el perfil técnico que se precisa para sus funciones, que no siendo una profesional del área, más si poseyendo una importante retribución pecuniaria propia de encargados de área de perfil profesional, se hace insostenible su permanencia en la División de Organizaciones Sociales, y que producto tanto de su reorganización, llevada a cabo mediante la resolución exenta N° 272/272, de 23 de marzo de 2022, como del cambio de lineamientos proveniente de las autoridades de dicha repartición, se ven en la necesidad de adecuar el personal a las necesidades sobrevivientes para su funcionamiento. Luego, de dichos antecedentes no se establece indicio alguno que diga relación con la comisión de actos arbitrarios de discriminación por pensamiento político o militancia política.

Finalmente, de los demás antecedentes aportados al juicio, no es posible extraer ningún antecedente objetivo que ilustre al Tribunal, si la militancia política de la actora fue motivo del término anticipado de sus servicios, siendo en este sentido la prueba insuficiente.

En consecuencia, a juicio de este sentenciador no se ha incurrido en un acto de discriminación arbitraria, toda vez que, el Ministerio Secretaría General de Gobierno conforme al régimen de Honorarios al que se encontraba sujeta la actora, tiene la facultad discrecional de ponerle término anticipado al convenio, al estar expresamente estipulado en el mismo convenio, e incluso sin expresión de causa, discrecionalidad que se encuentra dentro de las facultades que establece la Ley N° 19.880 que versa sobre las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

VIGESIMO PRIMERO: Que, para una adecuada resolución del asunto sometido a conocimiento de este tribunal, se tuvo presente que la acción de tutela



de derechos fundamentales fue incorporada a través de la Ley 20.260, buscando con ello principalmente la protección, resguardo y eficacia de ciertos derechos fundamentales del trabajador al interior de su relación laboral, ya sea mientras ésta se desarrolla o bien al llegar su término, a fin de que se restablezca el ejercicio de él o los derechos lesionados, reparando el daño producido en la ejecución de la relación laboral o bien derechamente resarcir o sancionar la vulneración que realice el empleador con ocasión del despido. Con ello se consagra el reconocimiento de la ciudadanía en la empresa, esto es la proyección de los derechos fundamentales de contenido civil y político del trabajador dentro de la relación laboral, para con ello evitar el abuso del ejercicio de las amplias potestades de mando que nuestra propia legislación laboral le reconoce al empleador.

Cabe destacar que el mencionado procedimiento de tutela no busca desconocer las potestades empresariales, sino que por el contrario, su objetivo es conocer y sancionar aquellas afectaciones graves, de envergadura, intolerables o como señala el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo para los casos en que se limita el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial.

En consecuencia, las molestias de menor envergadura que pudiesen sufrir alguno de estos derechos, queda excluida de la misma. Lo anterior no obsta en modo alguno a la posibilidad de que estas afectaciones, produzcan alguna consecuencia indeseada, de acuerdo a las especiales particularidades de quien se ve enfrentado dentro de la organización empresarial, a situaciones o restricciones que fuera de este ámbito serían inaceptables. En efecto, lo señalado no significa un desconocimiento de la ciudadanía en la empresa, sino que por el contrario, una constatación de que en la práctica se produce constantemente una tensión entre derechos que colisionan entre ellos, por un lado los propios y característicos de la potestad de mando y disciplinaria, que ha sido asociada al derecho de propiedad y a la libertad empresarial y por otro los derechos que emanan del reconocimiento



de que el trabajador es un ciudadano que está amparado constitucionalmente por la protección de su dignidad, libertad e igualdad.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, cabe discurrir que en la acción de tutela concurre la denominada prueba indiciaria, lo cual constituye una rebaja en el estándar probatorio; estándar que no está determinado en la ley laboral ni menos en la civil; no obstante, como origen histórico, esta prueba indiciaria está en la discriminación, cuya fuente legal está en el artículo 2° del Código el Trabajo.

En el caso de marras, es decir, tutela, el sentenciador debe realizar un juicio crítico de moralidad colectiva, ya que la tutela, se relaciona con el resguardo de derechos fundamentales, normas que per se son abiertas, lo cual implica un grado de emocionalidad, ya que su vulneración conlleva un grado de afectación.

El legislador, en el artículo 493 del Código del Trabajo dentro del título destinado al procedimiento de tutela laboral, en el que se inserta la acción que nos ocupa, introdujo una reducción probatoria, consistente en la obligación del trabajador de presentar indicios suficientes de la vulneración de garantías fundamentales que alega. Esta técnica, reducción probatoria, no implica inversión del onus probandi, puesto que no significa que sea suficiente la mera alegación de una lesión a un derecho fundamental, para que se traslade al empleador la carga probatoria, sino que ella consiste en aliviar la posición del trabajador exigiéndole un principio de prueba por el cual acredite indicios de la conducta lesiva, esto es, acredite hechos que generen la sospecha fundada, razonable, en orden a la existencia de la lesión que alega. En consecuencia, como se develó del análisis precedente, la demandante no cumplió con este estándar probatorio exigido.

VIGESIMO TERCERO: Que en todo caso, el derecho a la no discriminación laboral, puede ser entendido no sólo en un sentido. Un lado de la doctrina entiende que lo que está vedado constitucionalmente son las distinciones de trato negativas que carecen de justificación y/o arbitrarias, como dice Ugarte en "*Derechos fundamentales, tutela y trabajo*" el empleador lesiona este derecho cuando adopta un trato que afecta negativamente al trabajador, sin tener una justificación que respalde dicha conducta.



Es así que la no discriminación, estaría constituido por el derecho a no ser objeto de un trato negativo sin una justificación que impida considerarla arbitraria. Es aquí donde toma relevancia, la razonabilidad de la medida, es decir, una medida puede justificarse, cuando concurren criterios de razonabilidad y objetividad, es decir, cuando no es arbitraria, cuando existe una razón, justificación y/o explicación en la diferencia de trato, concurriendo supuestos de hecho, que constitucionalmente permiten que una determinada acción por parte del empleador no sea calificada de arbitraria ya que debe tener una razón de sustento. Pero el juicio de reproche que se hace en la discriminación, es el trato ofensivo, que en la temperatura del colectivo social, son inaceptables.

En el caso de despido, las diferencias de trato, vulneran la causalidad que debe tener el despido. Por tanto, es así que el despido, para que sea calificado de discriminatorio debe ser de gravedad, es decir *"debe tener un plus de gravedad que justifica el reproche de rango constitucional: el despido se funda en una razón inaceptable desde el punto de vista de las convenciones morales dominantes, en tanto desprecian la pertenencia a un colectivo determinado, como puede ser el sexo, la raza o la tendencia sexual del trabajador despedido, entre otras"* (Ugarte Cataldo, José Luis, Derechos fundamentales, Tutela y Trabajo, Thomson Reuters. Santiago año 2018, pág. 146)

Otra parte de la doctrina, ve la discriminación como un conjunto de elementos, esto es, un trato diferenciado entre iguales y que esta diferencia se justifique en un criterio sospechoso, prohibido o ilegal, sin que exista una justificación que valide la diferencia.

El artículo 2 del Código del Trabajo, señala que los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por



objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

En virtud de la disposición legal citada, la discriminación laboral supone una diferencia de trato negativa, que afecta la posición laboral del trabajador, lo cual provoca que pierda o deje de recibir un derecho o beneficio; este acto puede adoptar la forma de disminución de beneficios, aumento de carga de trabajo, la utilización del ius variandi o el despido, desvinculación como lo es el caso de marras.

Por tanto, analizada la prueba para establecer si el acto que acusó la denunciante como discriminación arbitraria, fue tal, se concluye que el término anticipado al convenio a honorarios fue ajustado a derecho.

VIGESIMO CUARTO: Que por otra parte, resulta evidente que cualquier exoneración o terminación de contrato puede comprometer un derecho fundamental en particular, porque hace que la persona pierda su fuente de realización o de ingresos y la expone a la cesantía.

En este orden de cosas, debe tenerse presente respecto a los indicios alegados, que la ley permite y concede, en este caso a la administración pública la facultad de renovar o no una contrata; y si tal decisión discrecional es infundada o carece de mérito, no es asunto que concierna a la tutela de derechos fundamentales, porque la protección especial que contemplada el legislador laboral ha sido reservada para aquellos casos que exceden o que superan la mera arbitrariedad.

En consecuencia, la sola falta de justificación, tampoco sería constitutiva de un indicio suficiente para entender configurada una vulneración del derecho aludido, con ocasión del despido; y en efecto, se traduce en que, en los juicios de esta naturaleza, no puede sostenerse como único fundamento la falta de justificación de la decisión de no renovar o de poner término anticipado al contrato en el caso de los funcionarios públicos, e incluso tampoco en los juicios seguidos por trabajadores en contra de su empleadores regulados por el Código del Trabajo, pues para aquello el legislador ha consagrado una acción específica,



como es la de despido improcedente, injustificado o indebido conforme lo dispone el artículo 168 del Código del Trabajo, requiriéndose entonces se denuncien hechos que permitan estimar que la decisión excede el mero arbitrio del empleador, sea este un ente público o privado, por lo que pretender que la facultad discrecional de ponerle término anticipado al convenio, al estar expresamente estipulado en el mismo convenio, e incluso sin expresión de causa, sea declarado vulneratorio, por la sola falta de fundamentación o justificación, implicaría en los hechos que al declarar un despido injustificado, indebido o improcedente, además siempre es vulneratorio, lo que claramente no es posible concebir.

En consecuencia, solo cabe rechazar la acción de tutela en todas sus partes, como se indicará en la parte resolutive del presente fallo.

VIGESIMO QUINTO: Que la prueba aportada ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica, sin alterar los principios de la lógica ni las máximas de la experiencia de este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo; y el resto de las alegaciones y probanzas no contienen información que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que se han tenido en consideración para resolver la presente controversia.

Que en cuanto al apercibimiento legal del artículo 453 n°5 del Código del Trabajo, solicitados en contra de ambas partes serán rechazados toda vez que las consecuencias de dichas normas, en nada hacen variar la decisión arribada por este sentenciador respecto a lo resuelto.

Que en mérito de lo resuelto resulta inoficioso pronunciarse sobre la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 420, 454, 456, 457, 459, y 485 y siguientes del Código del Trabajo; 1698 del Código Civil; Ley 18.575 y Ley 18.834, se declara:

I.- QUE SE RECHAZA en todas sus partes la denuncia por vulneración de garantías fundamentales, con ocasión del despido y la demanda subsidiaria de reconocimiento de relación laboral, nulidad de despido, lucro cesante y cobro de



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
prestaciones e indemnizaciones interpuesta por CLAUDIA ANGELA LANGE
FARIAS en contra del FISCO DE CHILE-MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO.

II.- Que no se condena en costas a la denunciante, por estimar que litigó
con motivo plausible.

Ejecutoriada la presente sentencia definitiva, regístrese y archívense en su
oportunidad.

RIT N° : T-922-2022
RUC N° : 22-4-0406618-1

Dictada por don Mauricio Alejandro Vidal Caro, Juez Titular del Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago, a veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro se notificó la
presente resolución por el estado diario.

